

# Potencia la expansión de grupos como el Tren de Aragua Impunidad total y cárceles hacinadas: la crisis del sistema judicial y penitenciario en Venezuela

Expertos plantean que casi ningún homicidio recibe sanción en el país y que las prisiones —controladas por bandas— tienen una ocupación de más del 64%.

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

La expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua han puesto la situación de seguridad de Venezuela en el centro de la discusión en América Latina, y países como Chile han establecido acuerdos en la materia con Caracas, como el que se alcanzó en el reciente viaje del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado medidas, algunas sumamente mediáticas, para demostrar que está atacando el problema, pero los datos y expertos plantean que hay serias fallencias en el sistema de seguridad del país que las hacen poco efectivas.

La impunidad es el problema número uno. Las cifras oficiales son opacas desde hace décadas, pero investigaciones de organizaciones locales e internacionales han mostrado que un enorme número de delitos quedan sin castigo en el país.

El Atlas de Impunidad Mundial —elaborado por el Eurasia Group en 2023— evalúa a 197 países y territorios en cinco dimensiones sociales clave que, para ellos, definen el nivel de impunidad. Venezuela ocupó el lugar 11 a nivel global solo por detrás de Afganistán, Siria, Yemen, Myanmar, República Centroafricana, Sudán, Irak, Burundi, República Democrática del Congo y Chad.

Ese estudio no evalúa solo la impunidad en materia de delitos, pues considera también elementos como la "gobernanza sin rendición de cuentas", pero también destaca lo mal que está el país en ese aspecto en particular, y los expertos lo plantean como un tema clave.

"Desde el punto de vista de la impunidad ante el sistema de justicia penal, o ante la ley, una pudiera estimarla en alrededor del 99%", dijo a "El Mercurio" Roberto Bricío-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, quien lleva décadas estudiando el tema. Según el especialista, en 1998, por cada 100 homicidios que se cometieron en el país hubo 110 detenidos, y una década después esa cifra pasó a nueve detenidos por cada 100 homicidios. En otras palabras, en el 91% de los homicidios no había ni siquiera un arresto, por lo que, con toda seguridad, la impunidad era mayor, pues la cifra no considera los procesamiento o juicios posteriores al arresto.



ORGANIZACIONES ALERTAN de un "hacinamiento en riesgo crítico" en Venezuela.



EL GOBIERNO lanzó operaciones para retomar el control de las cárceles, pero hay dudas de su efectividad.

Bricío-León plantea que la situación solo ha empeorado con el paso de los años y que una de las grandes explicaciones de esa impunidad, además de la "ineficiencia del sistema policial", es que "el gobierno del Presidente Hugo Chávez tomó la decisión de no perseguir el delito porque el delito era considerado como una expresión de la lucha de clases" y "no había que generar castigos, no había que hacer políticos de represión con la policía".

A esto se suman las denuncias de violencia policial, que también suelen quedar sin culpables. La ONU ha condenado casos en el pasado y su Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias analizará nuevas denuncias, sobre ejecuciones extrajudiciales y su impunidad, que le hizo llegar en agosto pasado la ONG Defien- de Venezuela.

Desde Eurasia Group dan otras razones para explicar el fenómeno. "La corrupción es una reclusión conforme al marco jurídico internacional, y muchos presos con un enfoque diferenciado (para atender a personas con necesidades particulares)", apuntó el informe.

## Denuncia por prisiones

El Observatorio Geopolítico de América Latina alertó sobre las condiciones en las cárceles en Venezuela, Nicaragua y Cuba, especialmente por las precarias condiciones físicas y las violaciones a los derechos humanos que, plantea, se comenten de manera sistemática en los centros de reclusión.

En su último informe, el grupo critica "la tragedia que padecen centenares de presos políticos víctimas de la persecución y violación sistemática de derechos humanos a cargo de los regímenes de (Nicolás) Maduro, (Daniel) Ortega y (Miguel) Díaz-Canel".

Las ONG levantan años pidiendo la liberación de los que consideran presos políticos en Venezuela y que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, actualmente superan las 250 personas.

gran causante de la baja en el puntaje de Venezuela (en Atlas de Impunidad Mundial)", aseguró a este diario Peter Ceretti, director de Macroestrategia Global de la organización, quien añade que "los datos sugieren que la justicia criminal y civil no funciona bien en el país y que la aplicación regulatoria en Venezuela también es débil".

"Venezuela también obtiene muy malos resultados en algunos de los indicadores que agrupamos en nuestra dimensión de Abuso de los Derechos Humanos, como el debido proceso del acusado y la ausencia de tortura, los cuales están relacionados con el sistema judicial y penal y deberían ser motivo de inquietud", añade Ceretti.

## MOTIVOS Los expertos destacan la ineficiencia del sistema, motivaciones políticas y la corrupción como principales razones de la impunidad.

### Prisiones llenas

Este último punto se relaciona con el otro gran problema del sistema penal venezolano y que podría parecer, en principio, opuesto al primero: el hacinamiento carcelario.

En las prisiones del país se registra un hacinamiento del 64%, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicado el año pasado, en el que detalla que hay 33.558 privados de libertad. El texto plantea que en el país hay 52 centros de reclusión, pero que solo 45 de ellos estaban operativos en 2022 y que 17 albergan una población carcelaria conforme a sus capacidades, lo que "indica un hacinamiento en riesgo crítico".

Las condiciones de reclusión cada vez empeoran. Ningún centro penitenciario del país cuenta con los estándares mínimos de

reclusión conforme al marco jurídico internacional, y muchos presos con un enfoque diferenciado (para atender a personas con necesidades particulares)", apuntó el informe.

Lejos de ser un problema solo para los reclusos, el alto nivel de ocupación en la mayoría de las cárceles potencia los niveles de violencia en el país, ya que han sido utilizadas por bandas criminales como base de operaciones para cometer delitos dentro y fuera del territorio.

"Por lo menos hasta hace muy poco, la mitad de las cárceles de Venezuela estaban bajo control de bandas criminales, que las usaban como base de operaciones y cobraban a los reclusos por estar allí. Por lo tanto, el hacinamiento les servía, en la medida que aumentaba sus ingresos", aseguró Phillip Gunson, analista para Venezuela de International Crisis Group. Uno de los grupos que opera desde estas cárceles es el Tren de Aragua.

## CRISIS DE SEGURIDAD Medidas y declaraciones



LA FAMILIA del narcotraficante llegó ayer a Guayaquil.

### Familia de jefe narco Fito, deportada desde Argentina

La esposa y tres hijos (de 21, 12 y 4 años) del jefe narco ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, fugado recientemente de una prisión en Guayaquil, llegaron a Ecuador ayer tras ser detenidos y equipados de Argentina. Los familiares de Fito, líder de la mayor banda narco de Ecuador, conocida como Los Choneros, y cuya fuga desató una ola de violencia, fueron apresados en la provincia de Córdoba, dijo la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien explicó que se habían instalado en un barrio privado en Córdoba el 5 de enero, tres días antes de que se conociera la fuga de Macías. "Estamos orgullosos de que Argentina sea un territorio hostil para que una banda de narcotraficantes pueda venir a instalarse", agregó. Desde su fuga confirmada el 8 de enero, el paradero de Fito es un enigma y se sospecha que está en Colombia o Bolivia, donde se activaron ayer las labores de búsqueda, dijeron autoridades.

“No, Ecuador no ha perdido la guerra contra esta gente, Ecuador está peleando contra esta gente neutralizándolos poco a poco”.

DANIEL NOBOA, PRESIDENTE DE ECUADOR. EN UNA ENTREVISTA CON LA EMISORA COLOMBIANA Y RADIO, UNA DE LAS POCAS QUE HA CONCEDIDO DESDE QUE SE AGIGORÓ LA VIOLENCIA Y SECRETÓ LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO. "ESTAMOS REORGANIZANDO ESTOS CENTROS DE LIBERTAD EN LOS CUALES ALGUNOS DE ESTOS LÍDERES PLANIFICABAN CRÍMINES... Y LOS ESTAMOS MOVIENDO DE SU ZONA DE CONFORT Y DESARTICULANDO ESAS REDES DE CRIMINALIDAD Y DE TERRORISMO". RESULTO.

### Más de 2.300 detenidos

Un total de 2.369 personas fueron detenidas en Ecuador en los primeros diez días de la declaración del "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, de los cuales 150 fueron arrestados por presunto terrorismo, según un balance publicado ayer por el gobierno. Las autoridades confirmaron que las fuerzas de seguridad abatieron a cinco presuntos miembros de las bandas criminales, ahora catalogadas como terroristas.

Dos policías fueron asesinados y otros cinco fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias. Además, el jueves un fiscal antimafia murió baleado en Guayaquil, un crimen en el que se investiga la participación de las pandillas. El balance también informó que fueron decomisadas 6,3 toneladas de drogas y más de US\$ 18.500 en efectivo.

### { OPINIÓN }

## La narcoviolenencia es un problema regional



ANDRÉS OPPENHEIMER

ESTO NO ES CHISTE: el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber convertido a su país en un centro del narcotráfico y el narcoterrorismo, acaba de ofrecer asistencia a Ecuador para combatir la violencia de las pandillas de narcotraficantes. Aunque es muy poco probable que el Presidente de centroderecha de Ecuador, Daniel Noboa, acepte la oferta de Maduro, Estados Unidos debería tomar la iniciativa y aumentar drásticamente su ayuda antinarcóticos a Ecuador y a varios otros países latinoamericanos que la están pidiendo. Washington tendría que hacerlo en su propio interés, porque la creciente violencia de las pandillas del narcotráfico no solo está aterrizando a la población en

gran parte de América Latina, sino que también está empujando a que muchos latinoamericanos emigren sin papeles a Estados Unidos. En un discurso el 15 de enero, Maduro dijo: "Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsqenos a nosotros, no busque al Comando Sur (de EE.UU.). Lo que va a hacer el Comando Sur es intervencionismo, colonialismo". LA OFERTA DE MADURO sonó ridícula para muchos ecuatorianos, porque la mayoría de los expertos coincide en que la actual ola de narcoviolenencia en Ecuador se generó tras la decisión del expresidente populista ecuatoriano Rafael Correa en 2009 de expulsar la base militar estadounidense anti-narcóticos en Manta. Ecuador, que algunos declararon un "estado de conflicto inter-

no" el 9 de enero para detener la violencia de las pandillas, ahora está pidiendo abiertamente más ayuda estadounidense, y más cooperación regional, para combatir la violencia de las pandillas. "ACEPTARÍA CON MUCHO GUSTO

enfero para "adoptar medidas concretas y efectivas para combatir el flagelo del crimen organizado transnacional". El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, me dijo en una entre-

visita que la primera prioridad de la reunión será establecer una base de datos actualizada de personas con antecedentes penales en todos los países participantes. Actualmente, los países andinos tienen acuerdos bilaterales para intercambiar información, pero no cuentan con una base de datos regional. OTRA MEDIDA que se discutirá en la reunión de ministros será la coordinación de las actividades de patrulla fronteriza, para que no

queden grandes áreas a lo largo de sus fronteras descubiertas, me señaló. "ESTAMOS CONCIENDO una violencia inédita, que conmueva a la población, y a la que hay que darle una respuesta más allá de nuestras fronteras", me dijo González-Olaechea. González-Olaechea agregó que en noviembre le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, más cooperación antidrogas de Estados Unidos. Perú no busca una reedición del Plan Colombia de 2000, sino un acuerdo de cooperación que incluya "instrumentos" para luchar contra las mafias de la droga, incluyendo "equipos militares", me dijo.

En última instancia, la creciente narcoviolenencia en América Latina y el consiguiente aumento de la migración ilegal a Estados Unidos no terminará a menos que Estados Unidos y Europa reduzcan su consumo de drogas. Contrariamente a lo que nos quieren hacer pensar demagogos populistas como Donald Trump, esto no se resuelve únicamente atacando a las mafias de las drogas en América Latina. PARA TERMINAR CON el narcotráfico, es necesario también reducir el consumo de drogas en Estados Unidos con más tratamientos de prevención, tratamientos, y campañas en televisión y redes como las que se hicieron exitosamente hace algunas décadas para reducir el consumo de cigarrillos. Muchísimos los estadounidenses, los europeos y, cada vez más, los latinoamericanos sigan consumiendo cantidades cada vez mayores de drogas, el tráfico de narcóticos seguirá creciendo. Dicho esto, mientras se intensifican los esfuerzos para reducir el consumo, Washington haría bien en ofrecer más ayuda anti-drogas a Ecuador, Perú y todos los demás países latinoamericanos que la están pidiendo a viva voz.

La creciente narcoviolenencia en América Latina y el consiguiente aumento de la migración ilegal a EE.UU. no terminará a menos que EE.UU. y Europa reduzcan su consumo de drogas.